

“Por ahora” la democracia está “interrumpida”



LA PATILLA

Elecciones suspendidas, casos de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno nacional, violencia rampante y asistida por políticas desacertadas, una oposición que busca reformularse para lograr atinar en sus estrategias y sesgo informativo. Así va iniciando este nuevo año que promete mucha incertidumbre

a democracia ha sido una de las banderas más enarboladas desde que en 1999 asumiera el poder el ex presidente Hugo Chávez. Esta adquiere su vigencia a través del voto popular, es la participación de todos lo que le da consistencia. La Constitución venezolana contempla que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. En este sentido, la democracia requiere necesariamente que se den las condiciones para que esa voluntad se exprese, no es una mera posibilidad que puede quedar a discreción del poder, tal como evidentemente está ocurriendo en la actualidad, contradiciéndose con aquel discurso que hasta hace muy poco argüía que nuestra democracia era perfecta por tener una consulta popular anual.

Para este año el CNE fijó que se realizarían las elecciones de gobernadores y alcaldes. Con respecto a las primeras, era a finales del año pasado que se debía celebrar el proceso electoral, pero, sin dar explicación alguna, el CNE decidió que se realizarían a finales del primer semestre de 2017, tal y como reseñamos en la “Vida Nacional” de noviembre pasado.

Ahora, ya en el inicio de este año, el CNE ha vuelto a alargar los plazos y no ha sido claro con el país sobre el momento preciso de realizar el proceso electoral. De hecho, a su juicio y siguiendo los lineamientos de una sentencia del TSJ que exigió a los partidos políticos iniciar un proceso de renovación de su inscripción ante el ente comicial, so pena de quedar inhabilitados para participar en los procesos electorales, las elecciones se encuentran “interrumpidas” hasta tanto no finalice este procedimiento que se estima culminará en el mes de julio.

Este procedimiento de renovación debió iniciar el 18 de febrero, pero se retrasó para el 4 de marzo. El mismo debe realizarse solo los fines de semana y participarán seis partidos políticos en cada oportunidad, debiendo recolectar un total de 0,5 % de firmas del Registro Electoral en al menos doce estados. Para ello el CNE dispuso de 390 puntos a nivel nacional, que trabajarán por siete horas diarias, es decir, que se estima que cada organización gozará

de 14 horas para lograr la meta del 0,5 %. En total participarán 59 partidos políticos, entre ellos están los que pertenecen al Gran Polo Patriótico y a la MUD.

No obstante, los partidos más pequeños ven comprometida su continuidad, entre ellos el opositor Causa R, y el oficialista PCV. Además, se ha denunciado que el procedimiento no es totalmente transparente, que se corre riesgo de que vayan surgiendo en el camino trabas y dilaciones que hagan el proceso más engorroso y pueda llevar a la ilegalización de varios partidos.

El antecedente del año pasado, suscitado por la recolección de las firmas para el revocatorio y su posterior anulación, es un indicio de lo que se teme. El Gobierno parece decidido a desarticular cualquier alianza opositora, sacando del ruedo a los partidos políticos, además de evitar todo proceso electoral que lo coloque frente al escrutinio del voto popular.

CASO ODEBRECHT

Se develó una enorme trama con la constructora más grande de América Latina, la brasileña Odebrecht, propiedad de Marcelo Odebrecht, quien desde 2015 permanece en manos de las autoridades de su país y ha admitido la existencia de una red de corrupción para que su empresa lograra la adjudicación de contratos públicos. La tormenta que se ha desatado afecta a varios países de la región, entre los que se encuentra Venezuela.

De acuerdo a la información que se ha suministrado, Venezuela figura como el segundo país donde la empresa canceló más dinero, aproximadamente unos 98 millones de dólares entre 2006 y 2015, además que se ha denunciado el sobreprecio de muchos de los contratos adjudicados.

Según reseñan medios de comunicación, la empresa, que ha trabajado en el país desde 1992,



800NOTICIAS

tiene al menos once obras adjudicadas, que ya fueron pagadas por el Gobierno, pero no han sido ejecutadas, entre las más notorias están: el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, la línea 5 del Metro de Caracas, el Metrocable La Dolorita y Mariches, la central hidroeléctrica Tocoma, entre otras.

Las primeras acciones del Gobierno venezolano, luego de conocerse el caso, fue la detención de cuatro periodistas, dos venezolanos y dos brasileños, que se encontraban recabando información sobre las obras inconclusas de la empresa. Dos días después se produce la respuesta “esperada”, cuando la Fiscalía allanó la sede de la empresa en Caracas y aprehendió a su director. Al mismo tiempo, el presidente Maduro, como quien se exime de toda responsabilidad, prometió que las obras inconclusas y encargadas a Odebrecht serían culminadas, aprobando para ello 557 millones de bolívares y, finalmente, asomó la idea de que un gobernador (sin decir quién) podría estar vinculado con la red de corrupción que se le atribuye a la empresa.

CENSURA Y REPRESIÓN SÍ, DENUNCIA Y CRÍTICA NO

A raíz de una investigación conjunta que realizó la cadena internacional *CNN* y su filial *CNN en español*, se reveló una su-

puesta red de venta de cédulas y pasaportes venezolanos en la embajada venezolana en Irak. Al parecer, algunos de estos llegaron a manos de personas vinculadas a grupos extremistas islámicos como *Hezbollah*.

Luego de la transmisión de esta investigación, diversos funcionarios del alto gobierno venezolano la rechazaron, expresando que se trataba de una operación mediática imperial que tenía como fin la búsqueda de la futura intervención del país, una amenaza que ponía en riesgo la seguridad interna de Venezuela. A raíz de esto, Conatel ordenó a las cableoperadoras la suspensión y salida inmediata de las transmisiones del canal en el territorio nacional. La medida se asemeja a aquella que el Gobierno tomó en el año 2014, al exigir que se censurara las transmisiones de la señal del canal de noticias *NTN24*.

Al margen de este hecho, se repite en otros ámbitos la censura oficial frente a voces alternativas que pretenden denunciar, criticar o, en suma, desmontar “la verdad” que construye el Gobierno nacional. Así le sucedió a un nutrido grupo de trabajadores de la salud que marchaban para denunciar el “abandono estatal”, la gravísima crisis de abastecimiento de medicinas y el estado de la infraestructura hospitalaria, cuando no lograron llegar hasta la sede del

Ministerio de la Salud, ya que les fue impedido el paso por un desproporcionado piquete de la policía y un supuesto grupo de adeptos al oficialismo.

TARECK EN LA LISTA NEGRA

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incluido al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, en la lista de funcionarios sancionados por su vinculación y “significativo papel en el narcotráfico internacional”.

La agencia ha insistido que la decisión se trata de una sanción en contra de un individuo, no un gobierno, y que la misma fue considerada luego de una “larga investigación” en la que creen que El Aissami ha facilitado el envío de grandes cargamentos de drogas, vía aérea y marítima desde Venezuela, y protección a traficantes. Se dijo también que utilizó su influencia y control sobre la oficina de inmigración y extranjería (hoy Saime) para vender pasaportes y visas a ciudadanos vinculados al terrorismo en los países del Medio Oriente.

Al vicepresidente se le vinculó también con el empresario Samark López Bello, su presunto testaferro. El Aissami reaccionó desde su cuenta en twitter calificando la sanción como de “infamia” y “agresión imperialista”, además de publicar una carta en una página completa del diario *New York Times*.



Tareck El Aissami

CUANDO EL PUEBLO MATA AL PUEBLO

Sin considerar en detalle las cifras no oficiales sobre el número de fallecidos por actos violentos en los primeros meses de este año, donde se habló que tan solo en el Distrito Capital el número rondaba los 504 fallecidos, sigue preocupando que el Gobierno nacional no logre atinar en las variadas y complejas causas de la violencia imperante. Al contrario, todo parece indicar que se mantiene la intención de utilizar toda la fuerza discrecional de las armas, siguiendo con los ya denunciados atropellos y ajusticiamientos, y un discurso abiertamente belicista. En este mismo sentido, en un acto con motivo del aniversario del bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora, el presidente Maduro informó al país la organización y despliegue de un organismo dentro de las milicias bolivarianas denominado “Fuerzas Especiales de Acción Rápida”, que podrán estar presentes en los barrios, las universidades y las fábricas, conformado por civiles con la tarea de cumplir labores de “orden público”.

Diversas ONG manifestaron su preocupación por el hecho de que civiles participen en este tipo de funciones, ya que se estaría así potenciando la proliferación de grupos de choque, cuerpos parapoliciales que con un fin político ejerzan mayor control y represión a aquellos que disientan de la palabra y acción oficial. A esto se le ha sumado la escandalosa imagen dada por el presidente Maduro cuando, durante una transmisión televisiva, empuñó un arma de guerra y consideró que pudiesen distribuir unas 10.000 o 20.000 armas de ese estilo en todos los barrios y campos del país para que los civiles (“patriotas cooperantes”) defiendan la patria, el territorio y la soberanía, ya que solo así “el pueblo salva al pueblo”.

REESTRUCTURACIÓN DE LA MUD

La oposición, organizada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, presentó al país los resultados de un proceso de reestructuración interna de cara a las nuevas exigencias. De esta forma se eliminó la Secretaría General que estaba ocupada por Jesús “Chuo” Torrealba y se decantó por la creación de tres grandes entidades: el Congreso de la Sociedad Democrática, el Comité Político y las secretarías sectoriales.

El primero de ellos será la máxima instancia consultiva y servirá como enlace permanente de las organizaciones políticas con la sociedad civil. Con respecto al Comité Político Operativo, denominado también “G9”, aglutina a nueve partidos políticos (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, La Causa R, Avanzada Progresista, Movimiento Progresista de Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela) y será una instancia de dirección que se reunirá semanalmente y se encargará de tomar “decisiones operativas”.

TODO PATRIOTA TIENE SU CARNET

El Gobierno nacional comenzó a emitir un documento de identificación, un carnet que ha denominado como “carnet de la patria”. Aunque se sabe muy poco de su fin y utilidad, algunos voceros del alto gobierno afirman que se trata de una política para optimizar y perfeccionar todas las misiones. Para la oposición será un instrumento de control social, así como de estigmatización y exclusión, además que han denunciado que a los empleados públicos, pensionados y estudiantes, les han obligado a obtenerlo.